

# Transición y nueva política en Costa Rica: del bipartidismo «perfecto» a la movilización social y el pluripartidismo

**Luis Guillermo Solís Rivera**

*Político e historiador. Universidad de Costa Rica.*

Durante más de medio siglo, el sistema político costarricense se caracterizó, entre la mayoría de los de la región latinoamericana, por la conjunción de cuatro elementos fundamentales: su *estabilidad*, fruto del establecimiento de mecanismos de elección democrática; su *legitimidad*, sustentada en un marco institucional encabezado por un Tribunal supremo de elecciones autónomo y con facultades omnímodas en materia electoral; su *representatividad*, expresada en la inclusión de casi todas las fuerzas políticas existentes en el país (hasta los partidos comunista y socialista, aun en momentos en que estos se encontraban formalmente ilegalizados), y su *naturaleza sólidamente bipartidista*, condición que se manifestó, desde 1953 en adelante —salvo contadas excepciones que confirmaron la regla—, en un control alterno del Poder Ejecutivo por los partidos o coaliciones mayoritarias cada cuatro años. Si bien estas y otras condiciones resultan más o menos de curso corriente en la América Latina de nuestros días, lo notable en el caso costarricense es que aquel conjunto de factores confluyeron a partir de la finalización de la última guerra civil del país (1948) y tras la promulgación de la Constitución de 1949, en plena Guerra fría.<sup>1</sup>

Desde un punto de vista sociológico, tal sistema político fue, en palabras de Jorge Rovira Mas, «mesocrático». Valga decir, se articuló en torno a un tenso entendimiento entre las oligarquías tradicionales del país —históricamente vinculadas a la producción del café, el comercio y las finanzas, pero reforzadas con un sector transnacional, de creciente peso político, relacionado con el cultivo del banano—, y los sectores de pequeña y mediana burguesía aliados con fragmentos progresistas de las élites nacionales y fortalecidos tras el triunfo militar de José Figueres Ferrer —*don Pepe*— en la guerra civil.<sup>2</sup>

Surgió así, conducida por el Partido Liberación Nacional (PLN) —fundado en 1951 por Figueres— la llamada «Segunda República», en esencia un Estado benefactor, que incorporaba en su seno dos grandes tradiciones políticas: la socialcristiana, que hizo posible la gran reforma social de los años 40, propiciada por un insólito pacto entre el Partido Comunista, la Iglesia católica y un fragmento de la gran burguesía nacional, y la «socialdemócrata», resultante de una ecléctica conjunción de keynesianismo económico, liberalismo político y conservadurismo cultural. Con altibajos, este

«modelo» se mantendría incólume hasta principios del siglo XXI, dotando a Costa Rica de una excepcionalidad reconocida en todo el hemisferio, subrayada aún más por la abolición constitucional de las fuerzas armadas como institución permanente.

Sobre el Estado benefactor y su crisis se ha escrito mucho y no es este el espacio para reseñar dicho análisis. Sí conviene recordar que, ya para finales de los años 70, Costa Rica tuvo que enfrentar los efectos de dos crisis provocadas por los aumentos en el precio del petróleo. También por esa misma fechas se generalizaron las propuestas de «ajuste estructural» promovidas por el Fondo Monetario Internacional con el apoyo de los gobiernos de los Estados Unidos —bajo Ronald Reagan— y Gran Bretaña —bajo Margaret Thatcher. Ello produjo grandes desequilibrios financieros en lo que había sido un modelo de organización que se desarrollaba sin sobresaltos, y motivó, a partir de entonces, un proceso de recortes en los programas estatales así como una caída sin precedentes en la inversión social. Aunque en Costa Rica los impactos de tales políticas fueron mucho menores y de aplicación más tardía que en otros países de América Latina, en última instancia marcaron un punto de inflexión en el desarrollo del sector público —hasta ahora incuestionado y decisivo— que para entonces sostenía a más de 30% de la población económicamente activa (PEA). También produjeron los primeros síntomas de desgaste del sistema político tradicional, el cual ya para aquel momento empezó a denotar los efectos de males que posteriormente se generalizaron: el clientelismo y otras formas igualmente perversas de corrupción.<sup>3</sup>

El corolario de este derrotero histórico ha sido una profunda transformación del sistema político costarricense acrecentada durante los tres últimos lustros y cuyos perfiles no terminan todavía de concretarse. Este ensayo interpreta esos cambios y los coloca en una perspectiva más amplia, pues junto a la política, también la sociedad costarricense ha experimentado otras profundas modificaciones en todos los órdenes.

## Una sociedad transformada

En los últimos sesenta años, la sociedad costarricense, su conformación, usos y costumbres, y también los factores estructurales que la condicionan, ha sufrido cambios notables.<sup>4</sup> La población del país, después de una fase intensa de expansión durante los años 50 y los 60, ha empezado a envejecer. Esto significa que, para mediados del siglo XXI, la pirámide poblacional se habrá invertido: serán pocos los jóvenes y muchos los viejos a quienes el Estado y la sociedad tendrán que atender.

En efecto, el incremento en la edad promedio de los ciudadanos traerá aparejados grandes desafíos de orden financiero —pensiones, por ejemplo—, de salud —la morbilidad cambiará de manera radical en un entorno de expectativa de vida ampliado—, de transporte y organización territorial, y de convocatoria y conducta política.<sup>5</sup>

Asimismo, aunque el imaginario popular se resiste a admitirlo, el país ha dejado de estar dominado por valores y actividades productivas propias del sector rural, y es, en lo fundamental, urbano, con una economía orientada hacia el sector terciario. La producción agropecuaria, por ejemplo, hoy representa tan solo 15% del Producto interno bruto (PIB), contra más de 60% a mediados de los 50. Ello ha sido acompañado por una concentración desordenada en las principales ciudades del centro del país, donde, desde hace ya varias décadas, reside más de la mitad de la población de Costa Rica. Tal situación contrasta considerablemente con la de los demás países centroamericanos, donde la ruralidad poblacional prevalece por encima de 40% del total, y hasta casi 60% en el caso de Guatemala.

Esto ha traído aparejada una mayor fragmentación sectorial de la fuerza de trabajo. La sociedad costarricense fue casi homogénea durante el siglo y medio que siguió a la independencia, en 1821. Aquellos años fueron de vida rural, matizada por segmentos relativamente pequeños de burguesía urbana, profesiones liberales y otras actividades vinculadas con los pocos servicios disponibles. Como resultado de las políticas del Estado benefactor, después de los años 40 del siglo XXI, los costarricenses ampliaron de modo exponencial sus ocupaciones y se ubicaron cada vez más en el sector terciario. En la actualidad, la diversificación creciente de las actividades productivas, la ampliación de la cobertura educativa y, en particular, la aparición de multitud de centros universitarios públicos y privados, han producido un profundo cambio social en importantes sectores urbanos que, en ascenso consumistas e informados, tienen expectativas no siempre satisfechas por la oferta laboral disponible, y muestran grados cada vez mayores de conservadurismo e insatisfacción política.

La otra cara de la moneda de este fenómeno, resultante de la aplicación de medidas de corte neoliberal durante los últimos veinticinco años, lo refleja el progresivo deterioro de la calidad de vida de los sectores de ingresos medios y bajos del país. El desempleo y el aumento de la informalidad laboral, así como el deterioro en la calidad y el acceso a servicios públicos de educación, salud, vivienda y crédito, afectan de manera especialmente brutal a estos sectores que se han visto desplazados a la marginalidad y, en no pocos casos, a la miseria.<sup>6</sup> En otro sentido, la pauperización progresiva de las «clases medias» —las cuales, como ya

vimos, constituían la «columna vertebral» del sistema político— ha resquebrajado los cimientos mismos del Estado social de Derecho, y amenaza de forma directa la estabilidad imperante en el país desde hace medio siglo.

Esto es más que una metáfora. Las principales ciudades del país se encuentran hoy divididas por visibles fronteras determinadas por niveles de ingreso, entre barrios que bien podrían ubicarse en el mundo rico, y áreas paupérrimas contiguas, donde impera la violencia típica del Cuarto mundo.<sup>7</sup>

En Costa Rica, durante la última década, los índices de crimen violento han pasado de 7 a 11 homicidios por cada cien mil habitantes. Si bien estas cifras siguen ubicándose entre las más bajas de Centroamérica, por encima de Nicaragua y por debajo de Panamá, no es tranquilizador que se hayan casi duplicado en tan poco tiempo y con tendencia a empeorar. Al respecto, prevalece una generalizada opinión entre los expertos en cuanto a la vinculación entre el aumento de la violencia y la expansión de las actividades del narcotráfico, que se han incrementado en toda la región de manera exponencial, como parte de las nuevas dinámicas del crimen organizado en la zona. Sin embargo, también es notorio un incremento en otros tipos de criminalidad y de violencia, incluida la doméstica, que ha experimentado un ascenso considerable.<sup>8</sup>

En suma, desde un punto de vista estructural el mayor cambio de la sociedad costarricense tiene que ver con el aumento de la desigualdad, cuyos bajos índices la diferenciaron durante décadas del resto de los países vecinos. Esta condición, detalladamente analizada por diversos informes, constituye, a mediano y largo plazos, el principal desafío para la política nacional.

## La ruptura del modelo «tradicional»

En ese marco general, difícilmente la política costarricense podía quedar exenta de transformaciones. El proceso se inició de forma tardía con respecto a otros países latinoamericanos, motivado por disparadores sociales insospechados. El primer aviso de lo que estaba por venir fueron las protestas sociales que se produjeron para impedir el intento del gobierno del presidente Miguel Ángel Rodríguez —del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), 1998-2002— de modificar el monopolio del sector de telecomunicaciones con el propósito ulterior de privatizarlo utilizando como vehículo un «paquete» de leyes a las cuales el ingenio popular bautizó como «el combo». En Costa Rica, tanto este sector como el de la producción de electricidad, tienen una notable legitimidad asociada al imaginario del Estado benefactor de los años 50 y los 60. Su ente principal, el Instituto

Costarricense de Electricidad (ICE) tradicionalmente ha sido un símbolo de la modernidad del país y un baluarte del principio de la soberanía energética, el cual, además, ha sobresalido por su eficiencia y alta competencia técnica en toda América Latina. Pese a ello, desde hace más de veinte años, el ICE ha sido acosado por las fuerzas privatizadoras. Sin embargo, en 1999, la arremetida frontal del gobierno, en connivencia con otras fuerzas políticas, dos expresidentes de la República y grandes capitalistas locales vinculados con compañías transnacionales, provocó una explosión social —sin precedentes desde 1969, cuando un movimiento social similar impidió el establecimiento en el país de la compañía minera ALCOA. Conducida en un primer momento por estudiantes universitarios y de colegios de secundaria, la ola de indignación se generalizó de inmediato. En pocas horas, el gobierno de Rodríguez y sus fuerzas policiales se vieron superadas por los manifestantes, quienes, severamente reprimidos al inicio, se recompusieron con rapidez, hasta el punto de poner en riesgo la estabilidad del Poder Ejecutivo.

El desenlace del «Combo del ICE» fue catastrófico para el gobierno de Rodríguez y sus aliados. No solo tuvieron que dar marcha atrás con la pretendida reforma legal, sino que el desaguado generó una fuerte crisis política que dejó al partido oficialista desacreditado y vulnerable, a más de dos años del fin de su administración. Para las fuerzas sociales y estudiantiles, por el contrario, la lucha contra el «combo» evidenció al menos tres fenómenos concomitantes, de los cuales tomaron debida nota: en primer lugar, la existencia de una «propuesta» hegemónica que trascendía a los partidos políticos históricos e involucraba a varios poderes fácticos; en segundo lugar, la importancia estratégica que en esa lucha había tenido la convergencia de los movimientos sociales, gremios, asociaciones ambientales y religiosas, organizaciones estudiantiles, etc., muchos de los cuales habían mostrado actitudes muy sectarias en el pasado; y, por último, la opacidad de los pactos y de los procedimientos de negociación utilizados por la élite política tradicional, que insinuaban no solo actitudes excluyentes sino también grados notorios de corrupción.

Curiosamente, las organizaciones populares y sociales involucradas en este inédito movimiento social no fueron capaces de trascender la coyuntura y la fuerza política que en su momento pudieron haber aprovechado se disipó. Esto fue especialmente cierto para el principal partido de la izquierda histórica que, habiendo liderado la lucha contra el «combo», quedó relegado entre los principales actores que se presentaron a los comicios presidenciales de 2002.

No obstante, la lucha contra el «combo del ICE» sí produjo una importante fisura en el PLN.

Crecientemente conservador, el Partido fundado por Figueres se plegó a los conciliábulos del gobierno y sus aliados y, en consecuencia, también terminó afectado por el descalabro sufrido por estos. De su seno se desprendió en el año 2000 un bloque de simpatizantes liderados por una figura joven y contestataria —Ottón Solís— que fundó el Partido Acción Ciudadana (PAC), el cual reivindicó de manera especialmente firme la ética y la moral en la administración pública, así como la defensa del Estado social de Derecho puesto en cuestión por los partidos históricos que en su momento lo prohicieron. Aunque el PAC terminó tercero en los comicios de 2002, su votación, alimentada por un bloque inusual de ciudadanos descontentos con los partidos tradicionales, fue suficiente para forzar a una segunda vuelta —inédita en la historia electoral del país— en la que el PLN fue derrotado por el PUSC.

La aparición del PAC constituyó una novedad en el sistema político costarricense e inauguró un nuevo ciclo en la vida electoral. Acusado de «moralista» y «ultra», el PAC y su líder lograron, sin embargo, posicionar el tema ético como central en la agenda pública de Costa Rica. Más aún, pusieron fin al bipartidismo «perfecto» que había dominado, con pocas excepciones, la política local desde 1953. Este logro, así como la profundidad de la crisis que afectaba al sistema político en ese momento, no fue percibido en toda su magnitud hasta que se realizaron las investigaciones y luego los arrestos y prisión preventiva de los expresidentes socialcristianos Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez (este último, a la sazón recién electo Secretario general de la OEA— en los años 2004 y 2005; en ambos casos, acusados de varios delitos contra la cosa pública.<sup>9</sup> A ello se sumó una investigación posterior que reveló la relación contractual de otro expresidente —el liberacionista José María Figueres Olsen (1994-1998)— con una empresa contratada por la compañía francesa ALCATEL, en ese momento involucrada en el escándalo en el que aparecía Rodríguez como actor prominente. A diferencia de lo ocurrido con Calderón y Rodríguez, las autoridades judiciales nunca le levantaron cargos a Figueres, ni encontraron razones objetivas para enjuiciarlo; no obstante, su salida *sine die* de Costa Rica y su renuencia a presentarse a las sesiones indagatorias realizadas por la Asamblea Legislativa levantaron muchas suspicacias y críticas que aún prevalecen en amplios sectores del país.

Estos acontecimientos produjeron un impacto sin precedentes en la ciudadanía y, profusamente cubiertos por los medios de información, se convirtieron en el punto de quiebre del sistema político tradicional. Las consecuencias tampoco se hicieron esperar. En las elecciones presidenciales de 2006, el PUSC fue repudiado en las urnas de forma masiva: pasó de 19 a 5

legisladores, y cayó al cuarto lugar en la votación general. Además, cuando el PLN postuló como candidato a Oscar Arias Sánchez —quien ya había ocupado el cargo de primer mandatario en el período 1986-1990—, la que parecía una fácil reelección se vio de pronto seriamente desafiada una vez más por Ottón Solís.<sup>10</sup> Aprovechando una inédita coyuntura de desencanto socialcristiano, y ayudado por la extrema polarización producida por el debate sobre el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana con los Estados Unidos (TLCCA-RD o CAFTA-DR, por sus siglas en inglés), Solís alcanzó un máximo histórico en la votación del PAC y casi derrotó a Arias, quien solo logró superarlo por escasos nueve mil votos, algo más de 1,2% del total.

Fue tan estrecho el triunfo de Arias que incluso levantó sospechas poco usuales en la historia contemporánea del país respecto a la pureza de esos comicios y el papel desempeñado en ellos por el Tribunal Supremo de Elecciones. Superada esa fase inicial de tensión, todo pareció volver a la normalidad; hasta que, según lo previsto, la administración Arias convocó a la ratificación del TLC en la Asamblea Legislativa, cuya firma se había producido, aunque con mucho atraso y evidente renuencia, en los meses finales del gobierno de su predecesor, Abel Pacheco (2002-2006).

## La lucha contra el TLC y su significado como catalizador político

El proceso de ratificación legislativa del TLC<sup>11</sup> suscitó una nueva movilización de agentes y movimientos sociales, así como de partidos políticos que una y otra vez frustraron las intenciones del gobierno de concretarlo. En esta ocasión, sin embargo, la polarización que ya se había manifestado durante la campaña electoral aumentó de manera exponencial, y dividió a la sociedad costarricense en dos grupos, casi idénticos, de favorecedores y detractores del Tratado. Especialmente importante en este contexto fue la aparición, por primera vez en la historia nacional, de los llamados «Comités Patrióticos», organismos sociales sin adscripción partidaria conocida, que se integraron de forma voluntaria e independiente en muchos municipios del país a partir de convocatorias locales. En estos núcleos ciudadanos se encontraron representantes de las más variadas proveniencias partidistas e ideológicas, y pronto se convirtieron en importantes plataformas de acción política que sustituyeron en protagonismo y capacidad de movilización, a los partidos involucrados —nunca en lo formal, sino por intermedio de sus militantes—, y le dieron a la lucha social un contenido mucho más autónomo y popular.

Para 2007, Costa Rica era el único país centroamericano que no había ratificado ese instrumento y esto le producía a la administración Bush una situación embarazosa frente a sus aliados regionales y en especial, ante sus propios aliados y adversarios en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos.

No corresponde realizar aquí un análisis del largo camino discurrido por el TLC desde su firma hasta su aprobación, prolongado por tres años. Es suficiente indicar que Arias, asediado por la terca oposición del Movimiento Patriótico del NO al TLC, se vio obligado a convocar un referendo con el fin de someter la decisión final a la voluntad popular. Por ser la primera vez que se utilizaba este mecanismo de consulta en la historia del país, el proceso estuvo marcado por grandes tensiones, manipulaciones oficialistas y desencuentros. El balance final antes del día de las votaciones mostraba la existencia de dos bloques irreconciliables entre sí: el Movimiento del NO, conformado por una variopinta coalición de entidades y organizaciones sociales, políticas y religiosas, y ciudadanos de todas las extracciones sociales; y el Grupo del SÍ, que aglutinaba al gobierno, las compañías transnacionales, los grandes bufetes corporativos que las representaban, el bloque de partidos políticos neoliberales —PLN y Movimiento Libertario principalmente—, los medios de comunicación tradicionales, las Cámaras empresariales, el gobierno norteamericano por medio de su embajada en San José, los capitales centroamericanos, y trabajadores movilizados por sus patronos, en particular del sector de manufacturas textiles. Se trataba, en suma, de un caso emblemático para el análisis desde la sociología política.

En última instancia, tras una campaña en la que el oficialismo recurrió con gran efectividad al recurso del miedo como principal argumento a favor del TLC, y no sin que antes se produjera una intervención *in extremis* de la propia Casa Blanca en los días inmediatos previos a la realización del referendo, el SÍ se impuso al NO por un escaso margen de menos de 3% de los votos emitidos. Este resultado, si bien fue considerado «heroico» por las fuerzas sociales involucradas, provocó paradójicamente un cisma entre las organizaciones contestatarias que terminaría —al igual que el «combo del ICE» siete años antes— desaprovechándose desde un punto de vista electoral.

En efecto, con dosis variables de intimidación, chantaje político, apelación al miedo, y concesión de prebendas económicas y políticas, la administración Arias utilizó con habilidad la legitimidad otorgada al TLC por el referendo no solo para ratificarlo sino principalmente para aprobar posteriormente toda la legislación que permitiera su implementación. Este proceso de enmiendas legales, que en algunos casos

incluso fue mucho más allá de los términos requeridos por el Tratado, sentó las bases de una nueva etapa en el desmantelamiento del Estado benefactor y, sobre todo, de los sectores que más interés concitaban en las empresas transnacionales: los monopolios estatales en energía, telecomunicaciones y seguros, y la modificación de las normas de propiedad intelectual, que facilitaría el acceso de las transnacionales a un promisorio mercado de productos farmacéuticos y medicamentos que, solo en lo que toca a la Caja Costarricense del Seguro Social, representaba, en el año 2007, gastos por más de setenta millones de dólares al año.

En ese contexto, la amplia movilización social concitada por la lucha contra el TLC perdió fuelle y, finalmente, se desvaneció como motor de articulación electoral de cara a las elecciones de 2010. De manera particular, los sectores más progresistas y de izquierda que integraban el Movimiento del NO le reclamaron al PAC y a otros partidos —que en su momento estuvieron en contra del Tratado, pero tras el referendo decidieron no obstruirlo— por una conducta que algunos no dudaron en calificar de abierta «traición» a la causa popular. Desmovilizados los Comités Patrióticos, dividido el Movimiento, y desgastado el PAC, que fue objeto de una de las campañas mediáticas de descrédito más abrumadoras y sistemáticas de la historia reciente de Costa Rica, el PLN ganó sin problemas las elecciones en la figura de la primera mujer en acceder a la primera magistratura de la nación, Laura Chinchilla Miranda (2010-2014).

## **El corolario del cambio: arbitrariedad, corrupción y la «Alianza por Costa Rica»**

No obstante el triunfo obtenido en el referendo y la capacidad que tuvo la administración Arias para recomponer su popularidad en la segunda parte de su mandato, el bienio 2008-2010 estuvo marcado por la arbitrariedad presidencial y la adopción de decisiones de dudosa legalidad que, en algunos casos, terminaron en los tribunales de justicia. Cabe mencionar, entre otras, las presiones de la Presidencia de la República sobre diversas instancias del Poder Judicial, incluida la manipulación de nombramientos de magistrados de varias salas de la Corte Suprema de Justicia; la política deliberada de dominar, por medio de designaciones de individuos política y personalmente afines al presidente y a su hermano, el ministro de la Presidencia, las instituciones contraloras del Estado —Contraloría y Procuraduría Generales de la República y Ministerio Público—; el otorgamiento de concesiones de carreteras sin adecuadas salvaguardas del interés público y exentas de marcos regulatorios; la autorización —vía decreto y

declaratoria de interés público— para el funcionamiento de una mina de oro a cielo abierto en una zona de conservación cercana a la frontera con Nicaragua; la destitución ilegal del Sindicato de Trabajadores de la Junta Administradora de los Puertos de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP), con el fin de facilitar la concesión del puerto de Moín (ello, tras fracasar el intento de «retribuir» a todos los afiliados con un pago de 160 millones de dólares, su apoyo al proyecto gubernamental y consecuente despido), etc.

Curiosamente, la primera «víctima» de este entramado de malas prácticas y abusos de poder fue la presidenta Chinchilla, cuyo mandato se inició en medio de intensas polémicas en torno a las actuaciones de su predecesor. Enfrentada a todos estos problemas y acosada, desde su propio partido, por el prematuro anuncio de Rodrigo Arias, hermano de Oscar, de su precandidatura presidencial activa para 2014 —que le significó a ella la pérdida del control político sobre la fracción legislativa del PLN—, tuvo un primer año de gestión muy problemático, agravado por dos temporales que, a finales de 2010, destruyeron 25% de la infraestructura vial asfáltica del país.

Este fue el escenario en el que, el 1 de mayo de 2011, se produjo uno de los acontecimientos políticos más inusuales en la historia del Poder Legislativo costarricense: la formación de un frente multipartidista, denominado Alianza por Costa Rica, entre casi todas las fracciones de oposición al PLN, las cuales, pese a sus profundas diferencias ideológicas resolvieron anar esfuerzos para formar, con 31 de 57 votos, una nueva mayoría en el Parlamento, y así desplazar al partido oficial, que cuenta con apenas 25 votos propios y dos de los partidos religiosos evangélicos, por primera vez en los últimos cuarenta años. Más aún, esta fue la primera ocasión en la historia costarricense en que una alianza partidaria logra este objetivo, pues otrora fue solo un partido —no varios— el que pudo romper la hegemonía oficialista.

La Alianza ha sido presentada como un espacio de articulación política de tipo parlamentario, cuyo propósito fundamental es rescatar la autonomía de la Asamblea Legislativa frente al Poder Ejecutivo. También como un instrumento para agilizar la tramitación de leyes y acuerdos, y como una oportunidad para mejorar la calidad del control político que los partidos de oposición tienen la obligación de ejercer frente al gobierno nacional. Pero, además, la negociación que culminó con su creación constituyó un proceso transparente, de cara a la ciudadanía y los medios de comunicación, y conllevó no solo la firma pública de los acuerdos por parte de todos los congresistas involucrados, sino también la de las Comisiones Políticas y los Comités Ejecutivos de sus respectivos partidos.<sup>12</sup>

Pero si algo llamó la atención al crearse la Alianza, más allá de su amplio espectro ideológico, fue la función que en ella tuvo el PAC. Este Partido, que siempre se caracterizó por su renuencia a participar, por razones de principio ético, en ejercicios de convergencia política como este, no solamente acompañó el proceso, sino que desempeñó un papel destacado en su concreción. Tanto es así, que uno de los diputados del PAC, Juan Carlos Mendoza García de apenas 35 años, resultó escogido para encabezar el Directorio opositor, y hoy ejerce la presidencia del órgano legislativo nacional.

Para los efectos de este ensayo, la conformación de la Alianza por Costa Rica marca un hito más —el tercero según lo indicado en páginas anteriores— en el proceso de cambio político que podría conducir, en 2014, a un gobierno antihegemónico en el país. Evidentemente, la Alianza es un fenómeno que se produjo en el ámbito legislativo, en el cual no es extraño ni difícil de imaginar la creación de una plataforma opositora de las características mencionadas. Un esfuerzo idéntico, pero dirigido a formar una coalición electoral con el fin de llegar a controlar el Poder Ejecutivo no solo plantearía muchos más desafíos prácticos, sino que conllevaría —para ser exitosa— una flexibilización ideológica y programática de parte de quienes la integren, lo que por el momento parece altamente improbable.

## En conclusión

Durante la última década, el sistema político de Costa Rica ha sufrido tres importantes «sobresaltos» caracterizados, todos ellos, por la articulación de fuerzas sociales y políticas insospechadas. El punto de encuentro de estos sectores ha sido, en términos generales, el repudio a los «usos tradicionales» de administrar la cosa pública que en ese período han sido hegemonizados por el PLN, abanderado del «reformismo costarricense» en el pasado y hoy parte de una alianza conservadora con quienes, por largo tiempo, fueron sus enemigos de clase. En particular, el cambio se ha producido porque una buena parte de los movimientos, sectores, organizaciones y partidos que han participado en este giro histórico, son «progresistas». Valga decir, son entidades que con diversos grados de radicalidad, se oponen a lo que genéricamente se podría denominar el «proyecto neoliberal», que tras dos décadas de aplicación en Costa Rica, pareciera haber desplazado al Estado benefactor que fue predominante en el país por más de medio siglo.

El marcado cambio en este debate no se ha producido en el vacío. La sociedad costarricense, su economía y relaciones culturales también se han modificado mucho. En la actualidad, Costa Rica es

una sociedad fragmentada, que envejece gradual pero inexorablemente, muy urbana, insegura, temerosa y desconfiada «del otro» y, sobre todo, escéptica de la política, los políticos y sus organizaciones partidarias, cuya legitimidad se ubica en los lugares menos privilegiados en las encuestas de opinión.

La estrategia de dismantelamiento del Estado benefactor de los años 50 y los 60, tercamente resistida por el país durante una década pero que por fin tomó forma y empezó a tener resultados concretos a finales de los 80, alcanzó un punto alto con la suscripción del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana con los Estados Unidos. Este instrumento —firmado en 2005, pero que no se ratificó sino hasta 2007 en medio de masivas movilizaciones sociales—, permitió a los sectores más conservadores del país contar con el recurso jurídico necesario para modificar por vía interpretativa, lo que les había resultado casi imposible lograr en las instancias políticas debido a la resistencia del modelo y sus propios agentes.

Está claro que las transformaciones políticas vividas por el país durante la última década abarcan no solo a los grupos progresistas y contestatarios de la sociedad. Si bien es cierto que estos grupos sobresalen por su combatividad y por sus originales, novedosas y en muchos sentidos inéditas maneras de articulación, también los sectores de la élite económica y política han modificado de modo sustantivo sus enfoques en relación con la administración del poder. En el caso de los primeros, llama mucho la atención la disposición de buscar nuevas formas de convergencia social y política que, sin evitarlas, disimulan mucho las grandes brechas ideológicas y programáticas que en otros momentos impidieron tales acercamientos y adopción de posiciones comunes. En el de los segundos, el abandono de la preocupación —muy acendrada en la política costarricense de la «Segunda República»— por la equidad, por la preservación de los equilibrios sociales que, sin desmerecer ni atentar contra el orden establecido sino, en última instancia, potenciándolo por medio del fortalecimiento de la «mesocracia» nacional, produjeron un sistema de convivencia estable, culturalmente conservador, reformista en lo social y progresivo en lo económico. Un sistema mucho más «revolucionario» y exitoso que otros resultantes de procesos radicales. Este abandono, que algunos han caracterizado como un proceso de «centroamericanización» del «modelo» costarricense, es quizá el más notable retroceso experimentado por la democracia nacional en el último medio siglo.

La cuestión ahora es saber cuál será el resultado final de esta serie de profundos cambios. Una posibilidad es que, al igual que lo sucedido con el «combo del ICE» y la lucha contra el TLC, la Alianza por Costa Rica

y cualesquiera otras propuestas de convergencia del movimiento social y político progresista, de camino al año 2014, se malogren. En tal caso, una vez más el país sería testigo de una dinámica social incapaz de convertirse en fuerza electoral que pueda derrotar al PLN. También podría ocurrir, sin embargo, que finalmente dichas fuerzas sociales encuentren, junto a los partidos políticos de los cuales tanto desconfían —no solo los progresistas sino incluso otros de mucho menor «pedigrí popular»—, un espacio para la construcción de agendas y la distribución de cuotas de poder que rompan con la hegemonía del PLN y sus aliados. En ese contexto, el país podría estar a las puertas de un cambio político equivalente al experimentado por otras naciones latinoamericanas —como Uruguay, país con el cual Costa Rica guarda muchas similitudes—, en donde la llegada al poder de sectores alternativos de izquierda moderada han dado un golpe de banda inesperado a un sistema político que lucía incapaz de sostenerse frente a las embestidas del capital transnacional.

Aún así, cabría preguntarse si un gobierno de tales características podría, frente a los desafíos que le plantea la globalización y los compromisos regionales ya adquiridos en el marco del TLC, resistir las tendencias globales; máxime cuando la escala de su economía es tan pequeña y tan dependiente frente de los factores de poder internacionales. Pero esta es una pregunta con mucho de retórica, pues no hay forma de contestarla, excepto llegando primero al poder, algo que solo ocurrirá en 2014 (como muy pronto); a menos que se considere que ya ha acontecido en el plano local, pues hay municipios donde ya gobiernan alianzas locales, conformadas por los mismos partidos que controlan el Directorio de la Asamblea Legislativa. Allí, los resultados hasta el momento son mixtos, al igual que no son concluyentes las lecciones aprendidas durante la elección de alcaldes y concejales de distrito del pasado mes de diciembre de 2010. En este caso, hubo alianzas exitosas, otras fallidas y aun otras en las cuales la experiencia fue muy positiva a pesar de la derrota frente a las fuerzas oficialistas.

Algunos lectores dirán, posiblemente con razón, que todo lo mencionado hasta ahora puede resultar interesante como anécdota, pero poco impresionante desde un punto de vista político, pues la transformación aludida como motivo principal de este análisis ni es lo suficientemente profunda, ni marca una verdadera ruptura de las tendencias del sistema político costarricense. Es legítimo tener esa posición, pero no hay que olvidar la peculiar naturaleza del país, donde los cambios no suelen ocurrir de manera abrupta, ni los procesos políticos modificarse en plazos cortos. De hecho, lo que más llama la atención de lo sucedido en Costa Rica durante la última década, es la gradual

pero progresiva acumulación de experiencias y fuerza política de partidos y organizaciones sociales por lo general poco vinculadas entre sí, y con poca capacidad de incidencia electoral en el conjunto del sistema político; en especial, frente a un PLN hegemónico, cuya fuerza y control han sido casi incontrastables durante ese período, pero que ya empiezan a hacer aguas como resultado de sus propias contradicciones internas, además de la presión que, desde afuera, ejerce una oposición en ascenso empoderada.

Para finalizar, habría que indicar la sensación, la percepción, de que debido a los abusos, arbitrariedades e ilegalidades del grupo hegemónico, en Costa Rica están madurando las condiciones de hartazgo social que, equivalentes a las de los «indignados» en España, podrían provocar un estallido de insatisfacción cuando se produzca una mínima chispa, un motivo ínfimo para decantar la ira contenida de la gente. Sobre esto no hay mediciones objetivas, sino distintas manifestaciones de malestar, tensión callejera e impaciencia creciente frente a la irresolución de problemas graves que, pese a serlo, no son eficazmente atendidos por las autoridades.

En suma, el sistema político costarricense, fruto de la «Segunda República», finalmente periclitó y ahora se encuentra en una fase de transición hacia un nuevo escenario, que todavía no termina por aclararse. Ese doble desafío, el de la transición y el de la construcción del espacio en donde se afincará el nuevo sistema, será uno de los principales asuntos de la agenda costarricense en los próximos años.

## Notas

1. Iván Molina y Steven Palmer, *Breve historia de Costa Rica*, Editorial de la Universidad de Costa Rica (EUCR), San Pedro, 2007.

2. Jorge Rovira Mas, ed., *Desafíos políticos de la Costa Rica actual*, EUCR, San Pedro, 2007. El tema fue elaborado previamente por el mismo autor en *La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI*, EUCR y Fundación Friedrich Ebert, San Pedro, 2001.

3. Alfonso González Ortega y Manuel Solís Avendaño, *Entre el desarraigo y el despojo*, EUCR, San Pedro, 2001.

4. Juan Manuel Villasuso, ed., *Procesos de cambio en Costa Rica: reflexiones al inicio del siglo XXI*, CEDAL y Fundación Friedrich Ebert, San José, 2001. La mejor colección de datos «duros» sobre el proceso de transformación de la sociedad costarricense durante los últimos tres lustros es el *Informe sobre el estado de la nación*, proyecto de investigación e incidencia política. El más actualizado de ellos, el XVI, correspondiente al año 2009, se divulgó en 2010.

5. Marlon Mora, *Discursos de la vejez*, manuscrito inédito.

6. Dos datos reveladores en esta materia: según el *III Informe sobre el estado de la educación* (2011), más de 50% de los estudiantes que

ingresan al nivel secundario —en Costa Rica la asistencia hasta el 9º grado de educación diversificada es obligatoria y costeadada por el Estado— no lo concluyen. En el caso de las mujeres, casi 20% de los partos son de jóvenes adolescentes, sin pareja. Su vulnerabilidad, en estas condiciones, es manifiesta.

7. De especial valor heurístico es el volumen de Jorge Nowalski, ed., *Asimetrías económicas, sociales y políticas en Costa Rica*, PNUD/CIDH/Fondo Costa Rica-Canadá, San José, 2003. Véase también Carlos Castro *et al.*, *Transformaciones en la estructura social en Costa Rica*, EUCR, San Pedro, 2007.

8. Entre otros, véase Daniel Matul Romero y Carlos Torres Jiménez, *Costa Rica y la seguridad democrática, valores para un modelo de seguridad*, FUNPADEM/CRIES, San Pedro, 2004. También PNUD, *Venciendo el temor. (In)Seguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa Rica*, PNUD, San José, 2005. Véanse datos más actualizados en Hans Mathieu y Paula Rodríguez Arredondo, eds., *Seguridad regional en América Latina y el Caribe* (Anuario 2009), Fundación Friedrich Ebert, Bogotá, 2010.

9. El caso del PUSC es emblemático de los tiempos que corren en el país. Sobre su evolución histórica véase Oscar Aguilar Bulgarelli, *La forja del Partido Unidad Social Cristiana (su verdadera historia)*, Progreso, San José, 2003 y Orlando Salazar Mora, *El Partido Unidad Social Cristiana: antecedentes, fundación e importancia en la vida política nacional (1963-2011)*, en prensa.

10. La reelección de Arias también resultó polémica. Prohibida desde 1969 por prescripción constitucional, la reelección no consecutiva fue restituida en la Carta Magna como resultado de un recurso presentado ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por favorecedores y amigos cercanos de Arias. Véase Guillermo Arce y Federico Tinoco, *Reelección en Costa Rica: golpe de Estado «constitucional» o reafirmación del orden constituyente*, Cuatricomía, San José, 2005.

11. La literatura sobre el TLC es abundante. A los efectos de este ensayo resultan relevantes María Florez-Estrada y Gerardo Hernández, *TLC con Estados Unidos: contribuciones para el debate*, EUCR, San Pedro, 2004; Alvar Salazar Antillón, *et al.*, *El Informe de los notables (Informe de carácter no vinculante al Presidente de la República sobre el TLC-CA-DR con los EEUU)*, Universidad Estatal a Distancia, San Pedro, 2005; Ludovico Feoli *et al.*, *Jornada de análisis sobre el TLC*, CIAPA, Curridabat, 2009; Gerardo Fumero Paniagua, *El Estado solidario frente a la globalización: debate sobre el TLC y el ICE*, Zeta Gráficos, San José, 2006; Saúl Weisleder, ed., *Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos: proceso y resultados*, EUNED, San Pedro, 2004. Sobre la posición de la Iglesia católica, véase Arquidiócesis de San José, Vicaría Episcopal de Pastoral Social, *Iglesia y TLC: documentos episcopales*, VEPS, San José, 2007.

12. Véanse declaraciones y compromisos de la Alianza por Costa Rica en [www.pac.org](http://www.pac.org).